



# JURÍDICO

CONSEJERÍA JURÍDICA

"2024, año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Noviembre 07, 2024.

**Asunto.-** Contestación a solicitud de Información Pública.

**MARIANA SOTO  
PRESENTE**

En términos de lo dispuesto por los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 74, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; 9, fracción XVII y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como 19 y 106 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; 18, 19 y 20 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal; y 1, párrafo primero del Acuerdo por el que se establece la Unidad de Transparencia y se integra el Comité de Transparencia de la Consejería Jurídica; en atención a su solicitud de información pública de fecha **09 de octubre de 2024**, identificada con número de folio: **171235224000058**, mediante la cual solicita: *"...Solicito se me proporcione la siguiente información y documentación en la VERSIÓN PÚBLICA correspondiente, respecto de todos aquellos hechos de transito ocurridos en tramos propiedad y/o resguardo del Gobierno Estatal del periodo de 2018 al 30 de septiembre de 2024 de los cuales se haya llegado a algún convenio y/o acuerdo reparatorio por parte de la Consejería Jurídica, esto en su calidad de Apoderados Legales del GEM: 1. Cuantos (cantidades en número) y en que tramos carreteros del GEM, han ocurrido hechos de transito dentro del periodo solicitado. 2. Cuantos convenios (cantidades en número) y/o acuerdos reparatorios se han celebrado, con motivo de los hechos de transito ocurridos en el periodo solicitado. 3. Los montos cubiertos por esos hechos de transito por la ciudadanía. 4. Los documentos comprobatorios que acrediten que se han ingresado las cantidades cubiertas por la ciudadanía derivado de dichos hechos de transito a las arcas del Gobierno del Estado de Morelos. Dicha información es de carácter pública y de intereses generar, y por lo tanto no aplica el supuesto de negativa, ya que se pide en versión publica, de conformidad por los artículos 3 fracción XXV y 82 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos..."* (sic), informo a Usted dentro del plazo concedido al efecto que:

De conformidad con las atribuciones establecidas en los artículos 5, fracción V, y 14 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, se anexa a la presente solicitud el escrito de contestación de la Dirección General de Asuntos Contenciosos de la Consejería Jurídica.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



*Xóchitl Bazán Tapia*  
**LIC. XÓCHITL ISADORA BAZÁN TAPIA**

**JURÍDICO**  
CONSEJERÍA JURÍDICA

UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

**TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO  
Y DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA**

Archivo/Minutario  
EAMC/XIBT





# JURÍDICO

CONSEJERÍA JURÍDICA

Dependencia:	CONSEJERÍA JURÍDICA
Depto:	Dirección General de Asuntos Contenciosos
Sección:	Área Penal
Oficio Núm.	CJ/DGAC/0030/2024
Expediente:	

"2024 Año, de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab."

**Asunto:** Se contesta la solicitud de Información Pública de folio 171235224000058

Cuernavaca, Morelos, 06 de noviembre de 2024

**LIC. XOCHITL BAZÁN TAPIA**  
**TITULAR DE UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO**  
**ADMINISTRATIVO Y TITULAR DE LA UNIDAD DE**  
**TRANSPARENCIA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA**

**MORELOS JURÍDICO**  
HORA: 12:11 PM FOLIO: 0657

07 NOV 2024

**RECIBIDO**  
UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Con Anexos

En atención a la solicitud de información formulada por MARIANA SOTO, a la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Morelos, registrada el 09 de octubre de 2024, bajo el número de folio 171235224000058; me dirijo a Usted para informar lo siguiente:

Por medio del presente escrito, y dentro del plazo concedido para ello, remito a Usted la contestación a la solicitud de información pública, así mismo, anexo la prueba de daño correspondiente, la cual fue aprobada mediante sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. JORGE ALBERTO GRAJALES GONZÁLEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONTENCIOSOS**  
**DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA**



C.C.P. MTRO. EDGAR ANTONIO MALDONADO CEBALLOS.- CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL.- Para su conocimiento.  
EXPEDIENTE/MINUTARIO

Elaboró	Firma	Revisó	Firma
Lic. Valentín Flores Díaz Subdirector de Juicios Contencioso Administrativo		Lic. Karina Beltrán Sánchez Directora de Asuntos Multidisciplinarios	





# JURÍDICO

CONSEJERÍA JURÍDICA

Dependencia:	CONSEJERÍA JURÍDICA
Depto:	Dirección General de Asuntos Contenciosos
Sección:	Área Penal
Oficio Núm.	CJ/DGAC/0031/2024
Expediente:	

*"2024 Año, de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab."*

**Asunto:** Se contesta la solicitud de Información Pública con folio 171235224000058

Cuernavaca, Morelos; 06 de noviembre de 2024

**C. MARIANA SOTO**

**P R E S E N T E . -**

En atención a su solicitud de información formulada a la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Morelos, registrada el 09 de octubre de 2024, bajo el número de folio 171235224000058, en la cual se requiere lo siguiente:

*"Solicito se me proporcione la siguiente información y documentación en la VERSIÓN PÚBLICA correspondiente, respecto de todos aquellos hechos de tránsito ocurridos en tramos propiedad y/o resguardo del Gobierno Estatal del periodo de 2018 al 30 de septiembre 2024 de los cuales se haya llegado a algún convenio y/o acuerdo reparatorio por parte de la Consejería Jurídica, esto en su calidad de Apoderados Legales del GEM:*

- 1. Cuantos (cantidades en número) y en que tramos carreteros del GEM, han ocurrido hechos de transito dentro del periodo solicitado.*
- 2. Cuantos convenios (cantidades en número) y/o acuerdos reparatorios se han celebrado, con motivo de los hechos de transito ocurridos en el periodo solicitado.*
- 3. Los montos cubiertos por esos hechos de transito por la ciudadanía.*
- 4. Los documentos comprobatorios que acrediten que se han ingresado las cantidades cubiertas por la ciudadanía derivado de dichos hechos de transito a las arcas del Gobierno del Estado de Morelos.*







Dependencia:	CONSEJERÍA JURÍDICA
Depto:	Dirección General de Asuntos Contenciosos
Sección:	Área Penal
Oficio Núm.	CJ/DGAC/0031/2024
Expediente:	

*"2024 Año, de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab."*

*Dicha información es de carácter pública y de intereses general, y por lo tanto no aplica el supuesto de negativa, ya que se pide en versión pública, de conformidad por los artículos 3 fracción XXV y 82 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos." (sic)*

Al respecto, de la revisión realizada a su petición y **con relación al punto número 1**, se contesta que esta área administrativa se trata de la Dirección General de Asuntos Contenciosos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos, y de conformidad con el marco jurídico de actuación, se rige por lo dispuesto en los artículos 74 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, artículos 9 fracción XVII, 14, 15, 16 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos, artículos 1, 2, 5 fracción I y V, 6 párrafo primero y fracción II, 8 fracciones VII, X, XIX, XXIV, 10 fracciones I, II, XVII, y 14, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal; en ese tenor, tal y como se puede apreciar las facultades con las que se cuenta son diversas y no coinciden con la administración, vigilancia y/o control de tramos carreteros, por lo que se desconoce cuantos y en que tramos carreteros han ocurrido hechos de tránsito. En virtud de lo anterior, deberá dirigirse a diversas autoridades, como pueden ser las autoridades de tránsito municipal, para que colaboren para proporcionar la información que Usted necesita.

**Con relación al punto número 2**, de su petición, relativos a *"Cuántos convenios (cantidades en número) y/o acuerdos reparatorios se han celebrado, con motivo de los hechos de tránsito ocurridos en el período solicitado"*, se contesta que esta Dirección General, a través del área de asuntos penales realizó una búsqueda minuciosa de la información solicitada, encontrando al respecto la conformación de expedientes relacionados con las carpetas de investigación que se mencionan en el punto número 3. Sin que se conozca si alguna otra dependencia y/o Secretaría del Gobierno del Estado de Morelos, pudiese tener más información al respecto. No obstante lo anterior, se adjunta al presente la prueba de daño correspondiente (anexo A), la cual de manera fundada y motivada explica que a la información es aplicable la excepción para efectos de clasificarla como reservada y confidencial.







# JURÍDICO

CONSEJERÍA JURÍDICA

Dependencia:	CONSEJERÍA JURÍDICA
Depto:	Dirección General de Asuntos Contenciosos
Sección:	Área Penal
Oficio Núm.	CJ/DGAC/0031/2024
Expediente:	

*"2024 Año, de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab."*

Con relación al punto número 3, relativo a *"Los montos cubiertos por esos hechos de tránsito por la ciudadanía"*. Se contesta que esta Dirección General, realizó una búsqueda minuciosa de la información solicitada, encontrando al respecto expedientes relacionados la conformación de las carpetas de investigación siguientes:

2018	2019	2020	2021
1. AHTF/059/2018. 2. AHTF/583/2018 Rel AHT/043/2018. 3. AHT/101/2017. 4. AHTF/152/2018. 5. AHTF/182/2018 6. AHTF/317/2017	1. SC01/2738/2019	1. AHT/265/2020	1. AHT/081/2021 2. AHT/131/2021 3. AHT/247/2021 4. CV01/469/2021

2022	2023	2024
1. AHTF/328/2016 2. AHTF/39/2021 3. AHT/49/2018 4. AHT/131/2021 5. AHT/247/2021 6. SC01/4782/2020 7. AHT/039/2021 8. AHT/081/2021 9. SC01/15483/2022	1.- AHT/348/2023 2.- JT01/707/2023 3.- AHT/367/2023 4.- AHT/25/2023 5.- AHT/389/2023 6.- AHT/431/2023	1. AHT/1/2024 2. AHT/2/2024 3. AHT/59/2024 4. AHT/101/2024 5. SC01/8648/2024 6. SC02/3618/2024

No obstante lo anterior, se adjunta al presente la prueba de daño correspondiente (anexo A), la cual de manera fundada y motivada explica que a la información es aplicable la excepción para efectos de clasificarla como reservada y confidencial.

Por último, con relación al punto número 4 de la petición de la usuaria, se contesta que esta área administrativa se trata de la Dirección General de Asuntos Contenciosos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos, y de conformidad con el marco jurídico de actuación, se rige por lo dispuesto en los artículos 74 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, artículos 9 fracción XVII, 14, 15, 16 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos, artículos 1, 2, 5 fracción I y V, 6 párrafo primero y fracción II, 8 fracciones VII, X, XIX, XXIV, 10 fracciones I, II, XVII, y 14, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal; en ese tenor, tal y como se puede apreciar las facultades con las que se cuenta esta área administrativa son diversas y no coinciden con el control, integración y/o resguardo de *los documentos comprobatorios que acrediten*







# JURÍDICO

CONSEJERÍA JURÍDICA

Dependencia:	CONSEJERÍA JURÍDICA
Depto:	Dirección General de Asuntos Contenciosos
Sección:	Área Penal
Oficio Núm.	CJ/DGAC/0031/2024
Expediente:	

"2024 Año, de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab."

que se han ingresado las cantidades cubiertas por la ciudadanía, derivado de dichos hechos de tránsito a las arcas del Gobierno del Estado de Morelos. En virtud de lo anterior, se considera que deberá dirigirse a diversa autoridad como pueden ser la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y/o la Fiscalía General del Estado de Morelos, para que colaboren y proporcionen la información que Usted necesita.

Al tenor de lo expuesto en el presente escrito y en el anexo A que se acompaña, me despido de usted enviando un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JORGE ALBERTO GRAJALES GONZÁLEZ  
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONTENCIOSOS  
DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA



C.C.P. MTRO. EDGAR ANTONIO MALDONADO CEBALLOS.- CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS. Para su conocimiento.  
EXPEDIENTE/MINUTARIO

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONTENCIOSOS

Elaboró	Firma	Revisó	Firma
Lic. Valentín Flores Díaz Subdirector de Juicios Contencioso Administrativo		Lic. Karina Beltrán Sánchez Directora de Asuntos Multidisciplinarios	







## ANEXO A

**Asunto:** Solicitud de reserva de información en atención a la solicitud de Información Pública con folio 171235224000058.

**LIC. XOCHITL BAZÁN TAPIA**  
**TITULAR DE UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO**  
**ADMINISTRATIVO Y TITULAR DE LA UNIDAD DE**  
**TRANSPARENCIA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA**

En atención a la solicitud de información formulada por MARIANA SOTO, a la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Morelos, registrada el 09 de octubre de 2024, bajo el número de folio 171235224000058, de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos y artículo quinto de los Lineamientos de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, **se emite la prueba de daño** con relación a los puntos 2 y 3, de dicha solicitud, en los términos siguientes:

Al respecto, de la revisión realizada a la petición y **con relación al punto número 2**, relativo a *"Cuántos convenios (cantidades en número) y/o acuerdos reparatorios se han celebrado, con motivo de los hechos de tránsito ocurridos en el periodo solicitado"*, se advierte que el sujeto obligado, a través del área de asuntos penales realizó una búsqueda minuciosa de la información solicitada, encontrando al respecto la conformación de expedientes relacionados con las carpetas de investigación que se mencionan en el punto número 3. Sin que se conozca si alguna otra dependencia y/o Secretaría del Gobierno del Estado de Morelos, pudiese tener más información al respecto.

**Así mismo, con relación al punto número 3**, relativo a *"Los montos cubiertos por esos hechos de tránsito por la ciudadanía"*. Se contesta que el sujeto obligado, realizó una búsqueda minuciosa de la información solicitada, encontrando al respecto expedientes relacionados la conformación de las carpetas de investigación siguientes:







2018	2019	2020	2021
1. AHTF/059/2018. 2. AHTF/583/2018 Rel AHT/043/2018. 3. AHT/101/2017. 4. AHTF/152/2018. 5. AHTF/182/2018 6. AHTF/317/2017	1. SC01/2738/2019	1. AHT/265/2020	1. AHT/081/2021 2. AHT/131/2021 3. AHT/247/2021 4. CV01/469/2021

2022	2023	2024
1. AHTF/328/2016 2. AHTF/39/2021 3. AHT/49/2018 4. AHT/131/2021 5. AHT/247/2021 6. SC01/4782/2020 7. AHT/039/2021 8. AHT/081/2021 9. SC01/15483/2022	1.- AHT/348/2023 2.- JT01/707/2023 3.- AHT/367/2023 4.- AHT/25/2023 5.- AHT/389/2023 6.- AHT/431/2023	1. AHT/1/2024 2. AHT/2/2024 3. AHT/59/2024 4. AHT/101/2024 5. SC01/8648/2024 6. SC02/3618/2024

Ahora bien, en los artículos 1, 6-A fracciones I y II, 16, primer y segundo párrafo, 20 apartado C, fracción, V, 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracciones I y II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 183, 184, 186, 187 y 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales; artículos 113 fracción VII, XII, XIII y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 3, 4, 11 fracción IV, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 87 y 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. Lo anterior, relacionado con los artículos Primero, Quinto, Séptimo, Octavo, Vigésimo Sexto, Vigésimo Noveno fracción IV, Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo y demás relativos y aplicables de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, vigentes. Disposiciones normativas que, estipulan lo siguiente:

### ***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***

**Artículo 1o.** *En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*







*Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.*

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley..."*

#### **Artículo 6º**

...

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

*A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

- i. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*
- ii. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.*

**Artículo 16.** *Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos*







*seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.*

*Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros..."*

**Artículo 20.** *El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.*

*[...]*

*C. De los derechos de la víctima o del ofendido:*

*[...]*

*V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.*

**Artículo 21.** *La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público.*

## **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos**

**Artículo 2.-** *El derecho a la información será garantizado por el Estado.*

*En el Estado de Morelos se reconoce como una extensión de la libertad de pensamiento, el derecho de todo individuo para poder acceder a la información pública sin más restricción que los que establezca la intimidad y el interés público de acuerdo con la ley de la materia, así como el secreto profesional, particularmente el que deriva*







de la difusión de los hechos y de las ideas a través de los medios masivos de comunicación.

*Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, el Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

*I. Toda la información en posesión de los poderes públicos estatales, autoridades municipales, organismos públicos autónomos creados por esta Constitución, organismos auxiliares de la administración pública estatal o municipal, partidos políticos, fondos públicos, personas físicas, morales o sindicatos que reciben y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal y, en general, de cualquier órgano de la Administración Pública del Estado es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. La normativa determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información;*

*II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes;*

## **Código Nacional de Procedimientos Penales**

**Artículo 183.** *Principio general. En los asuntos sujetos a procedimiento abreviado se aplicarán las disposiciones establecidas en este Título. En todo lo no previsto en este Título, y siempre que no se opongan al mismo, se aplicarán las reglas del proceso ordinario. Para las salidas alternas y formas de terminación anticipada, la autoridad competente contará con un registro para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión condicional del proceso, y el procedimiento abreviado, dicho registro deberá ser consultado por el Ministerio Público y la autoridad judicial antes de solicitar y conceder, respectivamente, alguna forma de solución alterna del procedimiento o de terminación anticipada del proceso.*

**Artículo 184.** *Soluciones alternas son formas de solución alterna del procedimiento:*

*I. El acuerdo reparatorio, y*





**Artículo 186.** Definición. **Los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado** que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal.

**Artículo 187.** Control sobre los acuerdos reparatorios. Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes:

- I. Delitos que se persiguen por querrela, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido;
- II. Delitos culposos, o
- III. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas

**Artículo 218.** Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa.

Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de







*oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.*

### ***Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública***

**Artículo 113.** *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

*...*

*V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;*

*[...]*

*VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;*

*[...]*

*X. Afecte los derechos del debido proceso;*

*[...]*

*XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y*

**Artículo 116.** *Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.*

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.*

*Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.*

*Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.*





## ***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos***

**Artículo 3.** *Para efectos de esta Ley se entiende por:*

*(...)*

XXIII. *Sujetos Obligados, a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y municipios, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el estado de Morelos;*

XXIV. *Unidad de Transparencia, a la instancia a la que hace referencia en el artículo 26 de esta Ley;*

*...*

XXVI. *Información Reservada, a aquella clasificada con carácter temporal como restringida al acceso del público, y*

XXVII. *Información Confidencial, a la que contiene datos personales relativos a las características físicas, morales o emocionales, origen étnico o racial, domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, patrimonio, número telefónico, correo electrónico, ideología, opiniones políticas, preferencias sexuales y toda aquella información susceptible de ser tutelada por los derechos humanos a la privacidad, intimidad, honor y dignidad, que se encuentra en posesión de alguno de los Sujetos Obligados y sobre la que no puede realizarse ningún acto o hecho sin la autorización debida de los titulares o sus representantes legales.*

**Artículo 4.** *El derecho humano de acceso a la información comprende: solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.*

*Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados se considera un bien público que debe estar a disposición de cualquier persona como titular de la misma, en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la normativa aplicable; salvo aquella que por la afectación de los derechos de terceros y excepciones previstas en la presente Ley, deba resguardarse por su carácter reservado o confidencial. ...*







**Artículo 11.** *El Instituto y los Sujetos Obligados por esta Ley, deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios siguientes:*

**IV. Máxima Publicidad.-** *Toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública, completa, oportuna y accesible, **situación que sólo podrá restringirse por las excepciones establecidas en la Ley**, que deberán estar definidas y además ser estrictamente necesarias en una sociedad democrática;*

**Artículo 76.** *El acceso a la información en posesión de las entidades públicas quedará restringido en los casos y en las modalidades que expresamente se señalan en la presente Ley. Las figuras jurídicas de excepción al derecho de acceso son las de información reservada y confidencial. Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de clasificar la información de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.*

**Artículo 77.** *El Área responsable de archivar y resguardar la información clasificada como reservada, la mantendrá restringida hasta por un lapso de cinco años. Excepcionalmente, los Sujetos Obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño y avalado por el Instituto.*

**Artículo 78.** *Las Áreas de los Sujetos Obligados elaborarán un índice de expedientes clasificados como reservados, que deberá actualizarse semestralmente y publicarse en formatos abiertos, al día siguiente de su elaboración, cada índice contendrá el plazo de reserva, fecha en que se realizó el acto de clasificación, nombre del área que la genera, las partes del documento que se reservan y justificación legal. El catálogo deberá estar a disposición del público.*

*En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.*

*Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al*





sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, los Sujetos Obligados deberá en todo momento aplicar una prueba de daño.

**Artículo 79.** El acuerdo que determina la clasificación de la información como reservada deberá señalar el plazo de reserva, la autoridad y el servidor público responsable de su resguardo, la parte o las partes del documento que se reserva, la fuente y el archivo donde radica la información, así como los fundamentos jurídicos y las motivaciones que justifiquen la reserva.

**Artículo 80.** En la aplicación de la prueba de daño, los Sujetos Obligados deberá justificar que:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;
- II. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio;
- III. El riesgo y los daños que potencialmente se deriven del conocimiento de la información clasificada sean superiores al interés de facilitar al público el acceso a la información reservada, y
- IV. La información solicitada se refiere a alguna de las hipótesis señaladas en la ley.

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizar cualquier de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los Sujetos Obligados.

**Artículo 81.** La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

- I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
- II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o
- III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de Transparencia previstas en esta Ley.

Los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o información como reservada. En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información. La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.







**Artículo 84.** *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

- I. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, o afecte la recaudación de contribuciones;*
- II. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;**
- III. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;*
- IV. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;*
- V. Afecte los derechos del debido proceso;**
- VI. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;**
- VII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y**
- VIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en Tratados Internacionales.*

**Artículo 85.** *Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.*

**Artículo 87.** *Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.*

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.*

*Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a Sujetos Obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.*







*Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los Sujetos Obligados, siempre que tengan el derecho a ello de conformidad con lo dispuesto por las Leyes o los Tratados Internacionales.*

***Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.***

***Primero.*** Los presentes Lineamientos Generales tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas. El presente cuerpo normativo es de observancia obligatoria para los sujetos obligados.

***Quinto.*** La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones aplicables en la materia.

***Séptimo.*** La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:  
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;

***Octavo.*** Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial. Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación también deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva. Tratándose de información clasificada como confidencial respecto de la cual se haya determinado su conservación permanente por tener valor histórico, ésta conservará tal carácter de conformidad con la normativa aplicable en materia de archivos. Los







*documentos contenidos en los archivos históricos y los identificados como históricos confidenciales no serán susceptibles de clasificación como reservados.*

**Vigésimo sexto.** De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos. Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos: I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite; II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.

**Vigésimo noveno.** De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes elementos: IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso.

**Trigésimo primero.** De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.

**Trigésimo segundo.** De conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el Estado mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo establecido en la Ley General. Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter.







De los ordenamientos legales en cita, se desprende de manera general la protección a los datos personales en los términos y con las excepciones que fijan las leyes y que se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Sirve de base y fundamento legal los siguientes criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

*Suprema Corte de Justicia de la Nación*

*Registro digital: 2000233*

*Instancia: Primera Sala*

*Décima Época*

*Materias(s): Constitucional*

*Tesis: 1a. VII/2012 (10a.)*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 655*

*Tipo: Aislada*

**INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).**

*Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información*







confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior **también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general**, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; **así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales**. Así pues, existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información.

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2022198

Instancia: Primera Sala

Décima Época

Materias(s): Administrativa

Tesis: 1a. XLII/2020 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 277







Tipo: Aislada

**INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PUEDE SER CONSIDERADA LA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CONTENGA LOS DATOS SOBRE SU DOMICILIO, SUS COMUNICACIONES, O CIERTOS INFORMES ECONÓMICOS, COMERCIALES Y AQUELLOS INHERENTES A SU IDENTIDAD QUE DEBEN ESTAR PROTEGIDOS FRENTE A INTROMISIONES ILEGÍTIMAS.**

*Hechos:* En un procedimiento administrativo seguido a una empresa por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), se emitió una resolución mediante la que se sancionó a la misma por haberse estimado la comisión de prácticas económicas absolutas; dicha empresa reclamó en amparo indirecto la versión pública de la resolución de mérito, mediante la que se ordenó la publicación y difusión de sus datos de identificación, por haberse tratado de una persona jurídica; así como lo establecido en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al haber estimado que resultaba inconstitucional al sólo proteger la información que contuviera los datos de identificación de las personas físicas, y no así los de las personas jurídicas, como era su caso.

*Criterio jurídico:* La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que del contenido literal de la porción normativa en comento, que establece como información confidencial aquella que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, no se advierte que excluya expresamente de esa tutela a las personas jurídicas en cuanto a su domicilio y sus comunicaciones, o bien, ciertos informes económicos, comerciales o inherentes a su identidad que, de suyo, sí deben estar protegidos frente a intromisiones ilegítimas.

*Justificación:* Lo que se obtiene de la norma no explicitada, derivada de lo establecido en el diverso ordenamiento al que, precisamente, se debe tal disposición, por deferencia jerárquica, es decir, por virtud del entendimiento que confiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 116, respecto a que los datos que se consideran confidenciales son los concernientes a cualquier persona en términos amplios, esto es, tanto a las físicas como a las jurídicas. Además, en atención al principio pro persona, al que hacen alusión tanto el artículo 1o.







*constitucional como la parte final del artículo 6 de la aludida Ley General, de los posibles significados que puedan atribuírsele a la fracción I del artículo 113 en cuestión, el que mayor beneficio genera es aquel que no acota la protección de datos confidenciales a un tipo de persona, sino a las personas físicas y jurídicas, en términos generales. Sin que lo anterior exima de la posibilidad de ponderar la protección de los datos confidenciales de las personas jurídicas, con la posibilidad de conculcar los derechos de terceros.*

*Amparo en revisión 884/2018. 15 de mayo de 2019. Cinco votos de los de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Luis Mauricio Rangel Argüelles.*

*Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.*

Lo destacado es propio

De lo anterior tenemos que, si bien es cierto, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos es sujeto obligado a transparentar y permitir el acceso a la información que obre en su poder, también es cierto que, tiene el deber de garantizar la protección de datos personales, atendiendo a la privacidad de los individuos y velando para que terceras personas no lleguen a incurrir en conductas que puedan afectarla arbitrariamente; entendiendo que la protección de datos personales no es solo una limitación al derecho de acceso a la información, sino que protege derechos que se deben de garantizar y solo las partes pueden tener acceso a ella. Así también, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado respecto a que la información puede limitarse en virtud del interés público, la vida privada y los datos personales, ello atendiendo al mandato constitucional, leyes generales y normas secundarias, donde quedan plenamente enunciados los límites para el acceso a la información. Por lo que, en el presente tema, hay sustento legal para considerar que se debe clasificar la información como confidencial.

Por otra parte, y en relación a la información considerada como reservada se aprecia que del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprende que **los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente**







de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

Así también, se señala que el Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. Por su parte, al analizar el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del cual se advierte que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente la víctima u ofendido, su asesor jurídico, el imputado y su defensor (estos dos últimos cuando se haya dictado auto de vinculación a proceso, o bien el imputado se encuentre detenido, sea citado para su comparecencia o sea sujeto a un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista), podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones previstas en el mismo código y demás disposiciones aplicables. En este sentido, se han pronunciado en el sentido de que la reserva de información debe entenderse en relación con personas ajenas a la investigación.

Lo anterior, de conformidad con los criterios que se invocan a continuación:

*Suprema Corte de Justicia de la Nación*

*Registro digital: 2025272*

*Instancia: Primera Sala*

*Undécima Época*

*Materias(s): Común, Penal*

*Tesis: 1a./J. 95/2022 (11a.)*

*Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo III, página 2817*

*Tipo: Jurisprudencia*







**IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD.**

*Hechos:* Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer.

*Criterio jurídico:* La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad.

*Justificación:* Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de







*permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de total importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa.*

*Contradicción de criterios 2/2022. Entre los sustentados por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito y el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito. 1 de junio de 2022. Mayoría de tres votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat, y el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Disidentes: Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretario: Horacio Vite Torres.*

*Tesis y/o criterios contendientes:*

*El emitido por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 11/2018, la cual dio origen a la tesis jurisprudencial PC.I.P. J/50 P (10a.), de título y subtítulo: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO QUE SE OSTENTA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO Y RECLAMA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIRLE EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN SU ETAPA INICIAL, PARA EJERCER SUS DERECHOS DE DEFENSA."; publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, febrero de 2019, Tomo II, página 1594, con número de registro digital: 2019310, y*







*El sustentado por el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2021, en la que prevaleció el criterio con carácter de jurisprudencia PC.VII.P. J/2 P (11a.), de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTAN SÓLO EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN A DARLE INTERVENCIÓN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN AL IMPUTADO, LA FALTA DE AFECTACIÓN A AQUEL CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA."*

*Tesis de jurisprudencia 95/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de seis de julio de dos mil veintidós.*

*Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2022 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de septiembre de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.*

*Registro digital: 2022783*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Décima Época*

*Materias(s): Penal*

*Tesis: I.9o.P.293 P (10a.)*

*Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 2964*

*Tipo: Aislada*

**INFORMACIÓN RESERVADA. EL ACCESO AL INCULPADO A LA INFORMACIÓN RELATIVA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE SU INTEGRACIÓN, NO OBSTRUYE LA PREVENCIÓN O PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS, POR LO QUE NO PUEDE NEGARSE BAJO DICHO SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 110, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.**







*Hechos: El quejoso realizó una petición en términos de los artículos 8o. y 20 constitucionales, en la que solicitó al Fiscal General de la República que de existir una averiguación previa o carpeta de investigación abierta en la que, en su caso, se le tuviera como probable responsable o sujeto a investigación, se le informara el número o identificación de ésta y la autoridad ministerial responsable de su integración. Ello, debido a que por información pública difundida en diversos medios de comunicación, supo que se le investigaba como probable responsable o partícipe en la comisión de hechos probablemente constitutivos de delito. Información que le resulta fundamental para ejercer sus derechos de audiencia y defensa adecuada. La responsable negó el otorgamiento de la información solicitada, bajo la hipótesis de reserva, en términos de los artículos 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; contra dicha determinación el quejoso promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional.*

*Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el acceso al inculcado a la información relativa para la identificación de la carpeta de investigación y la autoridad responsable de su integración, no obstruye la prevención o persecución de los delitos, por lo que no puede negarse bajo dicho supuesto previsto en el artículo 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*

*Justificación: El artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho fundamental de defensa de todo imputado en un proceso penal, incluida, desde luego, la fase de investigación, y asegura su adecuado ejercicio mediante la afirmación expresa del derecho a ofrecer pruebas y a conocer los datos que sean necesarios para ejercerlo y que obren en el proceso. Por su parte, del diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente la víctima u ofendido, su asesor jurídico, el imputado y su defensor (estos dos últimos cuando se haya dictado auto de vinculación a proceso, o bien el imputado se encuentre detenido, sea citado para su comparecencia o sea sujeto a un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista),*







*podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones previstas en el mismo código y demás disposiciones aplicables. En este sentido, la reserva de información debe entenderse en relación con personas ajenas a la investigación, sin que el impedimento pueda hacerse extensivo al quejoso, que en el caso pudiera tener la calidad de imputado, en razón de la información que precisó bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, lo que evidentemente son datos que conducen, al menos de manera indiciaria, a presumir una averiguación o carpeta de investigación. De ahí que la información solicitada no puede negarse bajo la hipótesis de que su publicación obstruye la prevención o persecución de los delitos, al no estar relacionada con la reserva de actuaciones o de los documentos que obran dentro de la averiguación previa o carpeta de investigación; máxime que al tener el quejoso la calidad de imputado, constitucionalmente tiene el derecho de desvirtuar la imputación que exista en su contra, precisamente al permitirle conocer los datos que sean necesarios para ejercerlo y que obren en la indagatoria o carpeta de investigación, cuando sea citado a comparecer.*

#### **NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.**

*Amparo en revisión 92/2020. 22 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla.*

*Nota: Por ejecutoria del 1 de junio de 2023, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, declaró inexistente la contradicción de criterios 2/2023, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, en virtud de que el punto de contradicción ya fue resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa contradicción de criterios 2/2022, de donde derivó la jurisprudencia 1a./J. 95/2022 (11a.).*

*Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la Federación.*

**Registro digital: 2016716**

**Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito**

**Décima Época**

**Materias(s): Penal**

**Tesis: I.6o.P.106 P (10a.)**







*Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, página 1903*

*Tipo: Aislada*

**CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI AL IMPUTADO QUE NO TIENE PERSONALIDAD EN EL EXPEDIENTE DE ORIGEN LE FUE RECONOCIDO EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR LA VÍCTIMA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE AQUÉLLA, ELLO LO FACULTA PARA IMPONERSE DE LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN REMITIDOS JUNTO CON EL INFORME JUSTIFICADO, PERO NO IMPLICA QUE PUEDA OBTENER COPIA DE ELLOS, AL TRATARSE DE DATOS RESERVADOS EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.**

*De los artículos 113, fracción VIII y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el derecho del imputado de obtener los registros de la investigación, durante la etapa previa, tiene como condición el que sea detenido, citado a comparecer o sea sujeto de algún acto de molestia, lo que no se surte cuando las víctimas impugnan en el juicio de amparo actos derivados de una carpeta de investigación, y el imputado no ha sido llamado a la investigación y, por ello, no se le ha reconocido personalidad en el expediente de origen. De ahí que si el Juez de amparo reconoce a éste el carácter de tercero interesado en la litis constitucional, ello lo faculta para imponerse del contenido del informe y sus anexos, pero no implica que pueda obtener copia de esos registros, pues se trata de datos reservados, en términos del código mencionado.*

**SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.**

*Queja 138/2017. 26 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: María Elena Leguizamón Ferrer. Secretario: Mark Hilario Azcorra.*

*Esta tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la Federación.*

Así las cosas, la información que se está solicitando MARIANA SOTO, indudablemente forma parte integrante de diversas carpetas de investigación y es inconcuso que dicha







información se debe mantener reservada al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación.

Más aún, porque al revisar caso por caso, esto es cada una de las Carpetas de Investigación mencionadas en la tabla que se encuentra inserta en el presente escrito, se confirma que el peticionario es una persona ajena a la investigación, así no es parte imputada, víctima u ofendido, y por lo tanto carece de interés jurídico y legitimación para intervenir en las diversas carpetas que se encuentran radicadas ante el Ministerio Público.

Aunado a lo anterior, se considera que la información con la que cuenta esta área administrativa y relacionada con las carpetas de investigación citadas en el presente escrito, es de las consideradas como información reservada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80, 81 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, con fundamento en las justificaciones siguientes:

1. Se considera que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública, esto es, debido a que la documentación que contienen los expedientes a resguardo de esta Dirección General, contienen información relacionada con las diversas carpetas que integran las investigaciones radicadas ante las diversas Fiscalías, ya sea Federales y Estatales, por lo que, es preciso señalar que las mismas se encuentran en integración y únicamente las partes tienen acceso a ellas, conforme a los preceptos jurídicos expuesto, pues estos restringen dicha información.

En ese sentido, esta Dirección General, siendo respetuosa con las autoridades competentes en la materia, en este caso las Fiscalías y sus diversas áreas administrativas así como los órganos Jurisdiccionales; tomando como base que el interés público es protegido por el Estado, a través de medidas de carácter administrativo, dirigidas a satisfacer las necesidades colectivas, y para efecto de no entorpecer las investigaciones y los procedimientos judiciales que se están llevando a cabo, se considera conveniente la reserva de la información señalada, para prevenir su divulgación, o en su caso el mal uso, desinformando a la ciudadanía en general o a un cierto grupo, al darse interpretaciones contrarias al contenido de la misma, lo que derive en la toma de decisiones por parte de







la autoridad competente, y que consecuentemente, ello afecte a las partes involucradas o bien entorpezcan la investigación del delito. Considerándose que la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados, como es el caso de la solicitante.

Y al considerarse que el riesgo real consiste en que las autoridades investigadoras y sancionadoras, no realicen sus atribuciones y funciones en un adecuado marco de libertad, objetividad e imparcialidad, sujetándose a presiones indebidas de carácter externo que puedan comprometer o condicionar el resultado de su actuación, ocasionando falta de certeza a las partes y a la sociedad acerca de la manera en que se resuelve un asunto, lo que ocurre al momento de que las autoridades competentes emiten algún acto; poniéndose en riesgo la debida conducción de las carpetas de investigación en mención; ya que la información solicitada y de la cual se requiere su reserva, es parte de investigaciones que realiza el Ministerio Público.

Como ya se precisó, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos así como garantizar el derecho de acceso a la información, ya que toda la información en posesión de cualquier autoridad, podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos que fijen las leyes, donde la información a que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Un principio rector de la información pública –es que- toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición a que sean públicos en los términos que fije la Ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros.

Aunado al caso que nos ocupa, los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones







establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

2.- Con relación a la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio –esto es- ya que el proporcionar la información afectaría en la debida integración de la indagatoria, pues los actos de investigación solo atañen a las partes, más aun cuando se advierte, que al no proporcionarle la información al solicitante, no le causaría perjuicio alguno al mismo, ya que únicamente tiene como fin el conocimiento de la información que es parte del derecho de acceso a la información, encontrándose por encima del interés particular del peticionario, el Interés General de la población de que se investiguen conductas o hechos que pudieran constituir delitos a través de las autoridades competentes; limitación que se adecua al principio de proporcionalidad y representaría el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que afectaría a una colectividad y no a solo una persona. Además de que, por disposición de la Ley, aplican las excepciones en comento.

3.- Por cuanto al riesgo y los daños que potencialmente se deriven del conocimiento de la información clasificada serán superiores al interés de facilitar al público el acceso a la información reservada –pues bien- el riesgo que se tiene al ser divulgada la información, es que afecte la debida integración de las carpetas de investigación, y en consecuencia se afecte la función que tiene el Estado a través de las autoridades competentes, de persecución de conductas o hechos que pudieran constituir delitos, afectando el Interés General de la población de que se investiguen e incluso sancionen conductas o hechos ilícitos, el cual predomina sobre el Interés particular del solicitante de tener acceso a la información. Aunado a que por disposición de la Ley, aplican las excepciones en comento.

4.- Relacionado con, la información solicitada se refiere a alguna de las hipótesis señaladas en la Ley. Es inconcuso que, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, en sus artículos 3 fracción XXVI y XXVII, 4, 11 fracción IV, 80, 81, 84 y 85, establece que la información peticionada es clasificable como reservada, cuya publicación puede obstruir en la investigación y persecución de delitos, en todos y cada una de los expedientes que están relacionados con las carpetas de investigación mencionadas en el cuerpo del presente escrito.







Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos vigésimo sexto y trigésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

En ese tenor, se considera que es procedente la clasificación de la información como confidencial y reservada, debido a los argumentos que han sido expuestos de manera fundada y motivada, en el desarrollo de este documento.

Por lo anterior, se solicita atenta y respetuosamente se someta a la consideración del Comité de Transparencia de la Consejería Jurídica del Estado de Morelos, la reserva de la información en comento, en atención a los motivos y fundamentos que han quedado expuestos.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Cuernavaca, Morelos; 04 de noviembre de 2024

ATENTAMENTE

**LIC. JORGE ALBERTO GRAJALES GONZÁLEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONTENCIOSOS**  
**DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA**



C.C.P. MTRO. EDGAR ANTONIO MALDONADO CEBALLOS.- CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL.- Para su conocimiento.  
EXPEDIENTE/MINUTARIO

Elaboró	Firma	Revisó	Firma
Lic. Valentín Flores Díaz Subdirector de Juicios Contencioso Administrativo		Lic. Karina Beltrán Sánchez Directora de Asuntos Multidisciplinarios	

